

4

La crisis del capitalismo en el oeste y el este de Europa

Özlem Onaran

La presente crisis sin precedentes del capitalismo a escala global tiene tres dimensiones: la económica, la ecológica y la política.

Para empezar, consideremos la dimensión económica, que constituirá el centro principal de atención en el presente artículo. El capitalismo se enfrenta con una importante crisis de realización, con una incapacidad para vender el producto producido, es decir, para realizar, en forma de beneficios, el valor excedente obtenido del esfuerzo de los trabajadores. El neoliberalismo se puede entender como un intento de resolver inicialmente la crisis de estanflación de la década de 1970 mediante el abandono del «consenso keynesiano» de la «edad de oro» del capitalismo (gasto relativamente elevado en bienestar social, sindicatos fuertes y cooperación entre los trabajadores y trabajadoras y la dirección de las empresas), por la vía de un ataque contra los trabajadores y trabajadoras. El intento tuvo éxito, en el sentido de que las tasas de beneficio se acabaron recuperando en las principales economías capitalistas en la década de 1990.

Sin embargo, el éxito del sistema en la recuperación de beneficios, gracias en parte al neoliberalismo, generó una crisis *potencial* de realización, debido a los bajos niveles salariales y de inversión. El enorme deterioro de los salarios limitó el consumo y obligó a los trabajadores a recurrir cada vez más al crédito. La reducción de la inversión en capital físico fue unida al desarrollo de una economía de casino, que canalizaba los beneficios hacia la especulación en activos financieros. La rápida financiarización de la economía estadounidense durante las dos últimas décadas contribuyó a incrementar la demanda a través de diversos efectos sobre la riqueza y el estímulo del endeudamiento y el crédito, pese al debilitamiento de la economía subyacente. No obstante, el crecimiento alimentado por el crédito no pudo mantenerse a la larga. A partir del verano de 2007, esa solución también falló y la economía capitalista se ha acabado enfrentando con una crisis sistémica de gran calado, comparable a la Gran Depresión, salvo por la intervención estatal sin precedentes que ha moderado las dimensiones visibles del declive. Ahora bien, con el desmoronamiento de los mecanismos financieros que hicieron posible todo ese endeudamiento, no está claro cómo dichas políticas estatales podrían superar la crisis de realización.

• Artículo publicado en *MR*, vol. 62, nº 5. Traducción de Mireia Bofill. Özlem Onaran (o.onaran@mdx.ac.uk) es profesora de economía y estadística en la Escuela de Negocios de la Universidad de Middlesex en el Reino Unido. Ha publicado numerosos artículos sobre crecimiento, desarrollo y empleo en la economía mundializada. Este es el primer trabajo que publica en *Monthly Review*.

Veamos, en segundo lugar, la dimensión ecológica. Los esfuerzos de recuperación se han centrado en mantener el crecimiento y el empleo a través de un consumo elevado. Se da por sentado que podremos continuar consumiendo como antes merced a innovaciones tecnológicas mágicas que permitirán aumentar la eficiencia energética de forma indefinida. No obstante, en la actualidad ya se han determinado científicamente los límites del crecimiento y, por lo tanto, no podemos continuar actuando como solíamos. Para mantener nuestro medio ambiente, el crecimiento económico a largo plazo debe ser nulo o inferior a cero, igual a la tasa de crecimiento de la «productividad ambiental». Sin embargo, para que eso sea socialmente deseable es preciso que estén garantizados un alto nivel de empleo y una distribución equitativa de la renta. Esto último entra claramente en contradicción con el capitalismo.

En tercer lugar, la profundidad de la crisis actual ha hecho mella en la legitimidad del neoliberalismo. El aumento del desempleo y la desigualdad en la Europa occidental después de la crisis, similar a lo ocurrido veinte años atrás en la crisis de transición en la Europa del Este, generará un grave descontento político. Existe, por lo tanto, un espacio para la radicalización, pero la izquierda aún no ha empezado a plantar cara a la hegemonía del capitalismo.

A continuación, me centraré principalmente en la crisis *económica* del capitalismo en Europa, tanto en el oeste como en el este. Sin embargo, dado que no es posible separarla por completo de las crisis simultáneas del medio ambiente y del neoliberalismo, volveré a considerar estas otras dimensiones de la crisis general del sistema en las conclusiones, donde examinaré las posibles respuestas políticas.

La crisis de la era neoliberal de la acumulación

Desde la década de 1980, la economía mundial se ha orientado hacia la desregulación de los mercados laborales, de productos y financieros. Esa desregulación se ha visto facilitada por la transformación de la Unión Soviética y de la Europa oriental, que abrió nuevos mercados, proporcionó un gran ejército de reserva de fuerza de trabajo barata y mitigó las presiones sobre los estados del bienestar occidentales para que mantuvieran unos niveles de vida dignos para las masas trabajadoras.

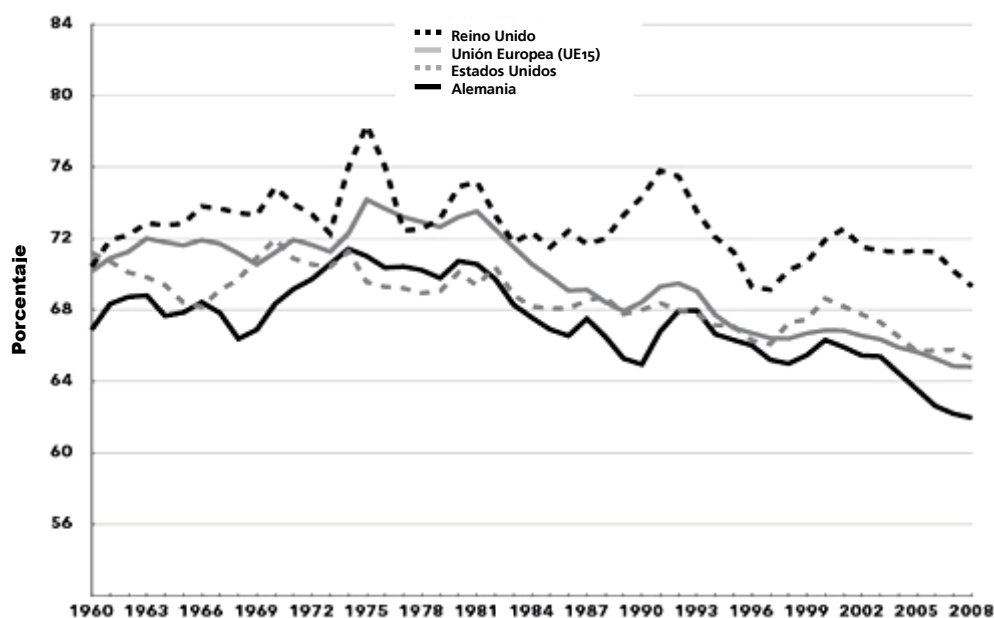
El resultado ha sido una dramática disminución del poder negociador de la fuerza de trabajo, tal como pone de manifiesto la reducción a largo plazo de la parte correspondiente al trabajo en la renta nacional en todo el planeta (véase el gráfico 1). Hay que señalar que, aun siendo llamativa, esta tendencia mundial que afecta a la participación de los salarios en la renta incluye el hecho encubierto de que las altísimas remuneraciones de los directores de empresa y otros altos ejecutivos están incluidas en la «renta salarial» total. Dado que los ingresos de esos estratos han aumentado de forma espectacular en relación con los de los trabajadores y trabajadoras corrientes, el desplazamiento de clase de los ingresos es mucho más acusado de lo que indican los datos.

Por consiguiente, la pérdida de poder de los trabajadores y trabajadoras durante este período se ha traducido en una ampliación de los márgenes de beneficio que ha contribuido a la recuperación de las tasas de ganancia. La era neoliberal también ha generado mayores beneficios a escala global para las empresas multinacionales, especialmente las del sector financiero.

Los beneficios del sector financiero han desplazado a los de la producción real en muchos aspectos. Con la progresivo preponderancia del sistema financiero, la conducta inver-

sora de las empresas ha estado cada vez más determinada por una orientación hacia la creación de valor para los accionistas, y se ha producido un desplazamiento de una conducta orientada a «retener y reinvertir» hacia un comportamiento orientado a «reducir y distribuir», con reducción de plantillas y distribución de beneficios. Los planes de remuneración basados en la rentabilidad a corto plazo han desplazado la orientación de los directivos en un sentido favorable a los objetivos de los accionistas. Unos mercados financieros no regulados y la presión de los inversores sobre los mismos han producido un sesgo a favor de la compra de activos, en contraposición a la creación de estos. Al mismo tiempo, la mayor parte de los esfuerzos de los responsables de elaborar políticas macroeconómicas han estado sesgados hacia el mantenimiento de la confianza de unos mercados financieros volátiles.

Gráfico 1. Parte de los salarios en la renta,* UE y países seleccionados (1960-2008)



* Compensación percibida por cada persona empleada como % del PIB medido según el coste de los factores por persona empleada. El PIB medido según el coste de los factores es igual al PIB menos los impuestos sobre la producción y las importaciones, más las subvenciones.

Fuente: AMECO, Base de datos macroeconómicos anuales de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea.

Los mercados se han desregulado sobre todo para apoyar los intereses de los capitalistas rentistas, con lo cual se ha modificado la relación entre beneficios e inversión: mayores beneficios no se han traducido automáticamente en mayor inversión. A pesar del aumento de las tasas de beneficio y de un entorno expansivo eufórico en muchos países, las tasas de crecimiento económico se han situado muy por debajo de sus tendencias históricas. En un entorno financiero desregulado, para los capitalistas sería irracional renunciar a oportunidades de lograr altos beneficios a corto plazo mediante la especulación financiera para realizar inversiones físicas a largo plazo, irreversibles e inciertas.

La reducción de la parte de la renta nacional correspondiente los salarios y el estancamiento de los salarios reales han sido fuente potencial de una crisis de realización para el sistema. Los beneficios solo se pueden realizar si existe una demanda efectiva suficiente para los bienes y servicios producidos. Sin embargo, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras afecta negativamente al consumo, dado que el gasto de las rentas procedentes de los beneficios es proporcionalmente inferior al de las rentas salariales (la transferencia de un dólar de un trabajador a un capitalista reduce el gasto de consumo total). Lo cual a su vez reduce todavía más la inversión, puesto que el gasto de capital depende de la demanda de los productos que el capital ayuda a producir.

Las innovaciones financieras parecieron ofrecer una solución a corto plazo a cualquier posible crisis de realización, con un crecimiento del consumo alimentado por el endeudamiento. Evidentemente, el modelo de crecimiento alimentado por el endeudamiento no hubiera sido necesario en ausencia de una distribución desigual de la renta. La deuda de los hogares aumentó de forma espectacular en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa. El aumento de la deuda hipotecaria y la subida de los precios de la vivienda se reforzaron mutuamente. Un aumento de la riqueza inmobiliaria servía como garantía subsidiaria para un nuevo endeudamiento y el dinero de los préstamos alimentaba el consumo y el crecimiento, manteniendo elevadas las tasas de beneficio. A pesar de unas tasas de crecimiento inferiores a las de la década de 1960, esta fase sentó las bases para una prolongada «expansión», con las peculiaridades accesorias de unos beneficios sin inversión, un crecimiento sin empleo y una fragilidad financiera creciente. El consumo financiado mediante deuda puede alimentar el crecimiento, pero llega un momento en que hay que pagar los intereses de la deuda. Debido a los elevados niveles de endeudamiento, aumenta también la vulnerabilidad de la economía frente a posibles conmociones en el mercado de crédito.

La desregulación de los mercados financieros y las consiguientes innovaciones en forma de valores garantizados por hipotecas, obligaciones de deuda garantizadas (*collateralized debt obligations* o CDO) y permutas de incumplimiento crediticio (*credit default swaps* o CDS) facilitaron el modelo de crecimiento alimentado por el endeudamiento. Estas innovaciones, combinadas con el modelo bancario de «originar para distribuir», multiplicaron el volumen de créditos que podían conceder los bancos, dados sus limitaciones de capital. Las primas concedidas a los banqueros, las comisiones bancarias, los elevados ingresos de los directivos (gracias a los altos beneficios bancarios) y las comisiones de las agencias de calificación crearon conjuntamente unos incentivos perversos que engendraron un enfoque a corto plazo y una ceguera ante los riesgos de este modelo de actividad bancaria. Aunque el riesgo de impago en el mercado de créditos de alto riesgo (*subprime*) era conocido, no se veía como un problema importante. La mayoría de esos créditos se vendían a otros inversores en forma de valores garantizados por hipotecas con una alta calificación de fiabilidad y, en caso de impago, se podían recuperar las viviendas. El negocio seguiría siendo rentable para el acreedor mientras los precios de las viviendas continuaran subiendo.

Pero ese modelo de actividad bancaria era muy arriesgado, una bomba de relojería predestinada a explotar. Las dificultades en los mercados de alto riesgo (*subprime*) acabaron desencadenando la explosión. Primero, en el mercado de obligaciones garantizadas (CDO), seguido por el mercado interbancario, para acabar finalmente con el hundimiento de todo el mercado crediticio a escala mundial.

Resulta interesante preguntarse por qué la bomba tardó tanto en explotar. El motivo es la evolución endógena de las expectativas (el «espíritu animal» del que hablaba Keynes). Dado que el modelo de crecimiento alimentado por deuda generaba crecimiento y beneficios a corto plazo, ello estimulaba el optimismo y este se retroalimentaba, con lo cual cada vez se subestimaban más los riesgos, incluso entre quienes inicialmente mantenían una actitud conservadora. En un mundo competitivo, incluso quienes perciben los riesgos se ven obligados a adoptar posiciones arriesgadas si quieren conservar su empleo como corredores de bolsa, banqueros o directivos. Solo un par de semanas antes del gran colapso de julio de 2007, el ex presidente de Citibank, Chuck Prince, declaraba: «Cuando deje de sonar la música, en términos de liquidez, las cosas se podrán difíciles. Pero mientras suene la música, hay que levantarse y salir a bailar. Todavía estamos en el baile». ¹ Cuando se produjo el sobresalto, fueron inevitables la restricción del crédito y el desmoronamiento del modelo de crecimiento alimentado por el endeudamiento.

Es concebible que hubiera podido evitarse una crisis, al menos durante un tiempo, si se hubiera hecho algo para atajar la creciente desigualdad en los ingresos y la riqueza que acabaría por estrangular la demanda agregada. Pero las poderosas elites globales, que ejercen una gran influencia sobre la elaboración de políticas a escala global, no hubieran estado de acuerdo con esa solución. Todo el mundo tenía puestas sus esperanzas en una política de rescate mediante créditos a muy bajo interés (*soft-lending*) que corrigiera las burbujas sin tocar la cuestión distributiva.

El modelo de consumo alimentado por el endeudamiento contribuyó a generar en los Estados Unidos un déficit por cuenta corriente superior al 6% del producto interior bruto. Este déficit se financió con los excedentes de países desarrollados como Alemania y Japón, de «economías emergentes» como China y Corea del Sur y de los países ricos en petróleo de Oriente Próximo. En Alemania y Japón, los excedentes de cuenta corriente y las consiguientes salidas de capital fueron posibles gracias a la moderación salarial, que frenó el consumo interior y favoreció las exportaciones. Otra consecuencia de la crisis distributiva.

En economías emergentes como China y Corea del Sur, la experiencia de las crisis asiática y latinoamericana estimuló una política de acumulación de reservas como dique de contención que evitara la salida especulativa de capital. La dimensión internacional de la desigualdad desempeñó un papel importante en este caso: esos países, amenazados por la libertad de movimiento y la volatilidad de los flujos financieros internacionales a corto plazo, invirtieron sus excedentes de cuenta corriente en bonos del gobierno de los Estados Unidos en vez de financiar sus planes de desarrollo nacionales.

En el contexto europeo, la fuerte moderación salarial en Alemania generó nuevos desequilibrios en el oeste, y también entre el este y el oeste. En el oeste, la ausencia de una política industrial integral y de inversiones públicas provocó un aumento de los costes de producción (costes por unidad de trabajo, es decir, los salarios divididos por la productividad) en países como España, Grecia, Portugal, Italia e Irlanda, de manera que los elevados excedentes de cuenta corriente de Alemania, Austria, los Países Bajos y Finlandia coexistían con déficit comerciales crecientes en los demás países de la UE. Los bajos niveles salariales de la Europa oriental tampoco evitaron que sus países incurrieran en altos déficit por cuenta corriente, debido al gran volumen de importaciones procedentes de las redes internacionales de suministro de las empresas multinacionales europeas, así como a los elevados beneficios de esos inversores extranjeros (repatriados además de reinvertidos).

El malestar económico del oeste de Europa

Aunque la crisis se originó en los Estados Unidos, su impacto ha sido más fuerte en Europa debido en parte a la aplicación más rápida de estímulos fiscales más importantes en aquel país. Según las perspectivas económicas de la OCDE (*Economic Outlook*, marzo de 2010), el PIB estadounidense registró una caída del 2,6% en 2009, mientras que en la zona euro la contracción fue del 4%, y de un 4,9% en el Reino Unido. Este último está experimentando una recesión más profunda, debido en gran parte a la burbuja inmobiliaria en el sector de la vivienda y a la deuda en ese sector. También son muy diversas las perspectivas dentro de la zona euro. Tanto el PIB alemán como el italiano se redujeron un 5% en 2009, mientras que en Francia la contracción fue de solo un 2,6%.

También divergen las fuentes de fragilidad en los diferentes países occidentales de la UE. Con la reducción de los mercados de exportación, Alemania está sufriendo la maldición de su estrategia neomercantilista: crecimiento basado en los mercados de exportación por la vía del estancamiento o la reducción de los salarios, que se ha traducido en decenios de estancamiento de la demanda interior. Los déficit por cuenta corriente crónicos de Grecia, Portugal, España e Italia —producto de la incapacidad histórica de la Unión Europea y su moneda única para lograr la convergencia regional— están resultando perjudiciales ahora que los inversores financieros han comenzado a imponer unos tipos de interés mucho más elevados para la adquisición de los bonos gubernamentales de dichos países deficitarios. Lo cual incluso está poniendo en entredicho la estabilidad del euro.

La capacidad de estos países para responder a las sacudidas también se ve constreñida por su capacidad fiscal. Austria está pagando elevados diferenciales en los tipos de interés debido a la expansión excesiva de sus bancos en la Europa oriental. Se espera que tanto Irlanda —con un sector bancario sobredimensionado y el estallido de su burbuja inmobiliaria— como España —con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente contracción de la construcción— continúen en recesión, con una capacidad limitada para invertir su curso.

Los salarios reales comenzaron a reducirse claramente en 2010 en el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia, tras los recortes salariales aplicados en casi todos los países europeos al iniciarse la crisis. Grecia, Portugal y España, en particular, están en el punto de mira de la UE y de los mercados financieros, y se están viendo obligados a aumentar su competitividad por medio de reducciones de los salarios reales, como parte de la aplicación de una terapia de choque más general en dichos países. Es probable que el fuerte y persistente aumento del desempleo, que incrementa el ejército de reserva de fuerza de trabajo, intensifique las pérdidas salariales y continúe reduciendo de forma dramática el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras.

El caso de Japón indica que, durante la fase inicial de una crisis deflacionaria (o de una recesión prolongada), la parte del trabajo en la renta permanece estancada o aumenta ligeramente, pero cuando la recesión y la deflación se prolongan, comienzan a registrarse incluso reducciones de los salarios nominales. En Japón, por ejemplo, la parte de los salarios se redujo un 8,9% entre 1992 y 2007.

La caída de los salarios en la Europa oriental también agregará nuevas presiones competitivas sobre los salarios en el oeste de Europa, con un impacto distinto en diferentes grupos de trabajadores y/o trabajadoras. Los primeros en perder sus puestos son los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales, mientras las empresas conservan a los más cualificados. No obstante, algún personal cualificado de la industria automovilís-

tica y metalúrgica y del sector financiero ya se ha visto afectado. Además, los futuros recortes del gasto social de los gobiernos también tendrán repercusiones asimétricas sobre los trabajadores y trabajadoras, y supondrán una carga adicional de trabajo en cuidados no remunerados para las mujeres.

El desempleo aumentó considerablemente en el Reino Unido y en la zona euro en 2009 y se espera que siga creciendo en 2010; se han registrado incrementos especialmente elevados en Irlanda y España. En conjunto, su mayor capacidad fiscal ha ayudado a muchos países del oeste de Europa a capear la conmoción mejor que los países en desarrollo. Aun así, sin el apoyo de fuertes estímulos fiscales, parece muy probable que la recesión sea larga. Aunque hayan tocado fondo, es posible que las economías no consigan salir del foso durante mucho tiempo y no cabe descartar ulteriores deterioros.

Frenazo en el este de Europa

El optimismo inicial sobre la desvinculación de la trayectoria del este con respecto a la del oeste parece ahora que se está demostrando erróneo. El problema fundamental de la región era una excesiva dependencia de los flujos de capital extranjero; cuando la crisis invirtió la dirección de estos flujos, se desencadenó la catástrofe. La crisis crediticia, las salidas de capital y las crisis monetarias que han acompañado a la crisis bancaria han afectado, por lo tanto, seriamente a los mercados emergentes del este de Europa. Pasado el choque inicial de la transición de unas economías planificadas a economías de mercado, y tras una década de reestructuración, estos países están sufriendo de nuevo los costes de la integración en los mercados mundiales no regulados.

La diferencia entre esta crisis y los ciclos habituales de expansión y contracción en la periferia es que ahora se trata de una crisis de escala planetaria y no simplemente regional. Esta se originó en los países capitalistas centrales, pero sus consecuencias para la periferia de Europa han sido y seguirán siendo más duras. La crisis crediticia también tiene una dimensión planetaria, con lo cual es improbable que se produzca la afluencia de capitales que suele seguir a una fase recesiva típica, con la consiguiente depreciación monetaria. Los mercados de exportación se han contraído muchísimo y la depreciación de la moneda local, que suele ser un desenlace habitual de los ciclos de expansión y contracción, ahora solo tendrá un impacto negativo sobre los balances, sin ningún efecto positivo sobre la demanda. La amplitud del crecimiento alimentado por deuda y del endeudamiento en el sector de la vivienda, denominada en su mayor parte en divisas, ha agravado esta crisis y, si las monedas locales se siguen devaluando, la carga de la deuda también se incrementará más aún, lo que a su vez intensificará la crisis.

La reducción del ritmo de crecimiento de la demanda global, la reducción de los flujos de inversión extranjera directa (IED), la salida de capitales invertidos en carteras de valores, la contracción de las remesas y la crisis crediticia están afectando a todos los países en desarrollo, pero la amplitud de los desequilibrios acumulados determinará diferencias en la intensidad de sus efectos en cada uno de estos países. Los países bálticos, Hungría, Rumanía y Bulgaria están más expuestos que Polonia, la República checa, Eslovenia y Eslovaquia. Pero incluso este último grupo está sufriendo el frenazo de la demanda global y la reducción de los flujos de inversión extranjera directa.

La contracción de las remesas también puede llegar a constituir un problema en el futuro. Una dependencia excesiva de los mercados de exportación y una peligrosa especialización en la industria automovilística —sobre todo en el caso de Eslovaquia, pero también

en la República checa y Eslovenia— han acabado constituyendo graves riesgos. Polonia solo está experimentando un estancamiento, y no una recesión, gracias a la mayor diversificación de su mercado y a las grandes dimensiones de su economía nacional, con un menor volumen de comercio exterior como porcentaje del PIB. Eslovaquia y Eslovenia han escapado a las turbulencias de los mercados monetarios gracias a la adopción del euro, pero su problema será una pérdida permanente de competitividad internacional frente a sus competidores, que están devaluando sus monedas.

La idea de que los países del este de Europa no sufrirían cuellos de botella relacionados con el déficit por cuenta corriente, gracias a que la inversión extranjera directa actuaría como una importante fuente de financiación del mismo, ha resultado ser un mito. Si bien es cierto que la inversión extranjera directa continúa resistiendo mejor que otros flujos de capital, sus flujos se redujeron entre un 20% y un 80% en el primer trimestre de 2009 hasta situarse en los niveles de 2001-2002.² Aunque los déficit por cuenta corriente también se están reduciendo, debido al descenso de las importaciones a causa del frenazo económico, la inversión extranjera directa financia en la actualidad una parte cada vez menor de los mismos. Además, aparte de financiarlo, la inversión extranjera directa también genera déficit en la balanza de cuenta corriente; la tasa media de repatriación de beneficios ha sido de un 70% en la región y en Hungría, Eslovaquia y la República checa, la inversión extranjera directa ha sido igual o inferior a los beneficios repatriados.

Una diferencia importante entre lo acontecido en el este de Europa y lo que ocurrió en crisis anteriores en el este asiático y América Latina es que los países de la Europa oriental se apoyaron en bancos matrices con sede en los países desarrollados, que contaban con una estrategia a largo plazo para la región. Aun así, dado el estrangulamiento de los mercados de crédito mayorista, los bancos matrices ya han agotado su capacidad para mantener los créditos a esta región. Las necesidades de crédito de los países occidentales también están creando oportunidades de inversión que compiten por unos fondos limitados a escala mundial. La actual depreciación monetaria en el este de Europa, unida a la recesión, dará lugar a un incremento de los créditos no productivos y también repercutirá sobre la actitud de los bancos matrices con respecto a sus filiales en el este.

Los Estados bálticos y Bulgaria tienen monedas vinculadas al euro y, si no pueden mantener esa vinculación (que requiere que dichos países tengan acceso a euros para adquirir moneda propia y mantener su estabilidad en el caso de salidas de capitales), se producirán nuevas devaluaciones que desencadenarán ulteriores efectos de contagio en la región. Por ejemplo, los bancos suecos presentes en los Estados bálticos y los bancos austriacos presentes en Bulgaria están presionando, junto con sus gobiernos, para que se mantenga la vinculación al euro y se evite la devaluación, por el temor a que se registren tasas elevadas de créditos impagados. Los gobiernos locales también apoyan la vinculación. Sin embargo, en el actual contexto político, el mantenimiento de unos tipos de cambio fijos sobrevalorados se conseguirá a expensas de una recesión y deflación muy profundas, que se traducirán en una devaluación *de facto*. El mecanismo de la misma parecen ser los recortes salariales masivos, como en el caso de Letonia.

Las consecuencias de una devaluación no controlada como secuela de una crisis monetaria generada por el mercado podría tener repercusiones distributivas muy graves, igual que sucedió durante las crisis asiática y latinoamericana. Cuando la moneda de un país permite adquirir menos moneda extranjera, sus importaciones se encarecen. Si la economía depende de las importaciones, como ocurre en muchos casos, la devaluación se traduce a su vez en inflación. La cual afectará más a los trabajadores y trabajadoras que a

la gente acaudalada. Hasta el momento, la tasa de depreciación ha sido moderada, y un entorno deflacionario y la caída de los precios de los productos han contenido la inflación; sin embargo, una y otra pueden agravarse en el futuro.

El desempleo ha aumentado de forma significativa en todas las economías del este de la UE (los nuevos Estados miembros), con los mayores incrementos en los países bálticos. Los salarios reales han disminuido en Hungría, los países bálticos, Rumanía y la República checa. Los programas de austeridad implantados en Hungría, Rumanía y Letonia intensificarán las presiones de la crisis.

El historial de las economías del este de Europa en materia de inversión extranjera directa, empleo y aumento de los salarios reales durante los últimos veinte años ha sido espantoso, con una recesión de transición, primero, y una crisis de alcance mundial, después. Los logros en materia de crecimiento y de mejoras salariales han distado mucho de ser espectaculares. El empleo se ha mantenido estancado en el mejor de los casos y ha disminuido en Rumanía, Estonia, Lituania y Hungría. Los salarios reales han permanecido estancados en Hungría y Eslovenia, e incluso han disminuido en Lituania y Bulgaria. En general, el incremento de los salarios reales ha sido inferior al aumento de la productividad. Incluso en Rumanía, donde el aumento de los salarios reales se mantuvo durante algún tiempo, este nunca fue superior a la mejora de la productividad. En conjunto, un balance que no parece política y socialmente viable.

Respuestas reaccionarias en el ámbito de las políticas

Todos los países avanzados reaccionaron ante la crisis emprendiendo esfuerzos de rescate sin precedentes. Se movilizaron instrumentos de política monetaria; se crearon paquetes de rescate financiero en forma de garantías de los depósitos privados, participación estatal mediante inyecciones de capital en los bancos y hasta nacionalizaciones y adquisiciones de «activos tóxicos», y se pusieron en marcha, aunque lentamente, paquetes fiscales de rescate bajo la forma de nuevo gasto en bienes y servicios públicos, apoyo al consumo (reducción de impuestos y transferencias) y estímulos para las empresas (reducción de impuestos y subvenciones sectoriales). El estímulo fiscal fue mayor en los Estados Unidos — aunque todavía escaso comparado con el que hubiera sido necesario—, mientras que los esfuerzos europeos fueron mucho menores (como porcentaje del PIB).

En general, las medidas fiscales han sido relativamente inadecuadas. En 32 países, el gasto de 2009 en medidas de estímulo fue inferior al 2% recomendado por el FMI. Los paquetes de rescate se basaron en previsiones relativamente optimistas y las medidas financieras han predominado en una relación de diez a uno sobre las medidas fiscales.³ En Irlanda, la política fiscal fue, de hecho, contractiva. Además, algunas de las medidas financieras pueden resultar muy arriesgadas: adquisición de instrumentos financieros de alto riesgo de bancos estadounidenses (Alemania); sobreexposición a la posibilidad de impagos en el este de Europa (Austria y Suecia), y ausencia de cualquier tipo de penalización para los bancos que no concedan créditos después de haber recibido fondos públicos.

La composición de los paquetes fiscales también ha sido inadecuada: en las economías más avanzadas, solo un 3% del gasto total está destinado al desempleo, solo un 10,8% a transferencias sociales a los hogares de renta baja y un 15% a infraestructuras.

Aparte de la dimensión de los paquetes, un problema importante es la ausencia en la Unión Europea de una política coordinada que aborde las diferencias entre sus miembros. En 2009, la Comisión Europea pidió a los países miembros que aplicaran un plan de estí-

mulo equivalente al 2% del PIB, pero no se tuvieron suficientemente en cuenta las divergencias en el seno de la Unión. El incremento en 2010 de la evaluación del riesgo de los bonos emitidos por los gobiernos de Grecia, España y Portugal, por obra de los especuladores financieros, indica que estas divergencias son el principal talón de Aquiles de la UE. Para agravar las cosas, los participantes en los mercados y los economistas neoliberales han estado presionando a favor de la disciplina fiscal con el fin de evitar el impago de la deuda soberana y una futura inflación.

En conjunto, se echa en falta una comprensión de las causas profundas de la crisis. Se hace excesivo hincapié en los bajos tipos de interés estadounidenses y se habla muy poco de la liberalización de los mercados financieros. El resultado han sido unas reformas inadecuadas, con escasas exigencias reales a las instituciones financieras responsables de una parte tan importante de la crisis. Aunque los costes de los paquetes de rescate son bien conocidos, no se está haciendo ningún esfuerzo para que estos recaigan sobre los responsables y los ricos. En el Reino Unido, el impuesto sobre las bonificaciones bancarias y sobre la cuenta de resultados solo actúa sobre una pequeña dimensión del problema de la desigualdad. En ningún lugar se están aplicando políticas destinadas a atacar la raíz principal de la crisis: el grave sesgo a favor del capital en la distribución de la renta. Por lo que respecta a los desequilibrios en la escala mundial, buena parte de la atención se centra en el exceso de consumo de los Estados Unidos o en los bajos salarios y la subvaloración de la moneda en China, más que en el *dumping* salarial y en el estancamiento del consumo interior en Alemania.

Incluso antes de los recortes presupuestarios, difícilmente se podían calificar de keynesianas las políticas aplicadas. Unas políticas auténticamente keynesianas impulsarían un programa amplio encaminado a estimular la inversión a través de iniciativas públicas y de incentivos al sector privado; una nueva regulación del sistema financiero, y controles de capital y tipos de interés fijos a escala internacional. Con el actual equilibrio de fuerzas entre las clases sociales, las élites no aplicarán voluntariamente políticas keynesianas. Incluso un retorno a la «época dorada» del capitalismo controlado requeriría importantes esfuerzos organizativos por parte de la clase trabajadora, que lograsen modificar de manera radical el equilibrio de fuerzas entre las clases sociales.

En el este de Europa, los intereses de las grandes sociedades multinacionales, en especial los de los bancos occidentales, definen las preocupaciones de la Unión Europea, limitadas al mantenimiento de la estabilidad monetaria, sin prestar atención al empleo y los ingresos. La Unión Europea ha delegado, de hecho, los problemas de las economías del este de Europa en el FMI, aunque con un cierto apoyo financiero para evitar un gran descalabro de los negocios europeos occidentales.

El FMI ha seguido actuando prácticamente como siempre a pesar del discurso aparentemente distinto. Frente a las presiones de la salida de capital, Hungría, Letonia y Rumanía han recurrido al Fondo. Igual que ocurrió en el caso de los países en desarrollo en los años de 1990 y principios de la década del 2000, las políticas del FMI han vuelto a ser mucho más restrictivas que las que el mismo Fondo considera apropiadas para los países del oeste de Europa, como Alemania. La línea de crédito no condicionado concedida a Polonia es el único instrumento nuevo que ha empleado el FMI. En cambio, Hungría, Rumanía y Letonia se han visto presionadas para obligarlas a aceptar unas políticas fiscales fuertemente procíclicas. La disciplina fiscal sigue siendo la norma y los recortes de salarios en el sector público y de las pensiones forman parte de las recetas. En Letonia se ha reducido en un 23,7% la nómina de salarios públicos y en un 10% las pensiones. Estas fueron las condi-

ciones, junto con una subida del IVA del 18 al 21%, que tuvo que aceptar el gobierno letón para recibir el segundo tramo del paquete de apoyo del FMI. En Estonia y Lituania, se impuso un recorte del 20% en los salarios públicos y una reducción de las prestaciones sociales. La aplicación de controles sobre el capital para evitar movimientos especulativos o de una devaluación controlada ni siquiera se menciona en los debates del FMI o de la UE.

¡Existe otra alternativa!

Hay un gran descontento entre la población por la forma en que han reaccionado los gobiernos en el poder ante la crisis. Irónicamente, esto ha mermado la legitimidad de cualquier política alternativa que incluya mecanismos «colectivos» de gobernanza o de nacionalización. Aun así, por primera vez desde la caída del muro de Berlín, se ha abierto una oportunidad para argumentar que el capitalismo es económica, ecológica y políticamente inestable e insostenible. El camino para canalizar el descontento popular hacia un modelo económico socialista alternativo sostenible, igualitario, democrático, participativo y planificado es pedregoso, pero ahora tenemos algunas ventajas. Ha quedado claro que unos mayores beneficios no se traducen en inversiones o en más puestos de trabajo, que el crecimiento no supone una reducción de la desigualdad y que las economías capitalistas de mercado son propensas a sufrir crisis sistémicas. No obstante, para formular políticas alternativas es importante destacar qué ha causado la crisis. No se trata simplemente de una crisis de unos mercados sin una reglamentación adecuada. Es una crisis de distribución desigual y habría que preguntarse por qué los trabajadores y trabajadoras continúan sufriendo sus efectos. Seguir actuando como hasta ahora no es una alternativa.

Nuestro punto de partida deben ser los problemas urgentes del empleo, la distribución y la sostenibilidad ecológica.

En primer lugar, la política fiscal debe tener como ejes un programa de empleo y una política distributiva. Se debe realizar gasto público en servicios intensivos en trabajo como la educación, la atención infantil, las residencias para personas mayores, servicios de salud, comunitarios y sociales, y también en infraestructuras públicas y en inversiones verdes. Estos son también los ámbitos en los que es posible reorientar la economía hacia un desarrollo sostenible y solidario. Estos servicios, que ahora se prestan con salarios muy bajos, a menudo como servicios de lujo para las clases altas, o bien mediante el trabajo femenino no remunerado en los hogares, debería prestarlos el Estado u organizaciones sin ánimo de lucro, obligadas por ley a corregir las desigualdades entre hombres y mujeres.

Para lograr la sostenibilidad ecológica, se requiere una modificación de la composición de la demanda que favorezca las inversiones verdes a largo plazo. Esto no se podrá lograr sin una inversión pública activa.

Por lo que respecta al empleo en el sector privado, es importante evitar la «socialización de los costes». En otras palabras, los trabajadores y trabajadoras y las personas desempleadas no deberían tener que pagar los costes de la actuación irresponsable del capital a escala mundial. Un ejemplo sería el caso de las empresas que aprovechan la crisis para poner en práctica sus estrategias de reducción de plantillas a largo plazo. En muchos países europeos se está recurriendo a la regulación de la «reducción de jornada» para combatir el paro, compensando con transferencias públicas una parte de la pérdida salarial ocasionada por la reducción de jornada impuesta por las empresas. Otra alternativa sería obligar a las empresas a pagar los costes mediante medidas legales destinadas a paralizar los despidos y establecer unos salarios mínimos. Sería lógico prohibir la reducción de

plantillas en las empresas que están en condiciones de repartir dividendos y pagar elevados salarios a sus directivos. Si la paralización de los despidos provoca la quiebra de algunas empresas, estas se podrían revitalizar bajo el control de los trabajadores y trabajadoras, con el apoyo de créditos públicos. En Argentina hubo ejemplos muy extendidos de este proceder durante el pasado decenio, como una estrategia de supervivencia de los trabajadores y/o trabajadoras en empresas cerradas, que a menudo suspendían su actividad sin pagar salarios atrasados ni indemnizaciones. En 2007, había diez mil personas empleadas en empresas autogestionadas en Argentina. En el caso de sectores, como el automovilístico, sobre los que pesa la amenaza de despidos masivos, se debería considerar la alternativa de una socialización y reestructuración. En la industria del automóvil, se podría desplazar el eje de actividad hacia la producción de vehículos de transporte público, junto con una transferencia gradual de fuerza de trabajo hacia nuevos sectores innovadores.

Los planes de estímulo, paquetes a favor del empleo y planes de recuperación ecológicos se deberían financiar mediante impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio, un aumento del tipo de gravamen del impuesto de sociedades, impuestos de sucesiones e impuestos sobre las transacciones financieras. De este modo se obligaría a pagar los costes de la crisis a sus responsables y se evitarían futuros recortes presupuestarios en las partidas de gastos sociales, educación, salud y atención infantil y de la gente mayor.

Las rebajas fiscales y subsidios para los grupos de ingresos bajos o la ampliación de las prestaciones por desempleo han sido soluciones a corto plazo características. Sin embargo, no compensan el deterioro general de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Estas son preocupantes, no solo desde un punto de vista igualitario, sino también desde una perspectiva macroeconómica. Las políticas de moderación salarial solo agravan el problema de insuficiencia de la demanda y garantizan un futuro de salarios bajos. Para actuar sobre el aspecto más fundamental de la crisis, la política económica debe resolver primero la crisis distributiva. Se debe reducir significativamente la jornada laboral (de forma paralela al aumento de la productividad del trabajo), con una corrección salarial a la alza. Los altos beneficios del pasado son los causantes de la crisis; por lo tanto, sus receptores deben pagar ahora los costes.

Esto no solo constituye una respuesta crucial frente al problema del desempleo, sino que también daría respuesta a la crisis ecológica: el desarrollo sostenible requiere un crecimiento económico nulo o muy bajo en los países desarrollados; por consiguiente, el pleno empleo solo se podrá conseguir mediante una reducción de la jornada laboral. Las pérdidas de ingresos para las masas trabajadoras se pueden evitar mediante una redistribución significativa. Una reducción de la jornada laboral también nos ayudará a democratizar la toma de decisiones, al permitir que los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo para la participación.

En segundo lugar, es urgente rediseñar el sector financiero. Su reglamentación es importante pero insuficiente; las instituciones financieras poseen una capacidad asombrosa para eludir las normas mediante nuevas innovaciones. La crisis ha evidenciado que los grandes bancos privados están sacando partido de la ventaja que les supone ser «demasiado grandes para quebrar». Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el reto es garantizar la financiación de nuevas y grandes inversiones socialmente deseables; en el sector energético, por ejemplo. Lo que hace falta es crear un sector financiero público, no meramente estatal, sino de propiedad colectiva, con la plena participación de los trabajadores y trabajadoras y otras partes interesadas en todas las decisiones. Las cuentas de este sector financiero de propiedad pública deberán ser completamente transparentes. Solo así

podrán aplicarse las regulaciones financieras que se enumeran a continuación con el fin de conseguir unos resultados socialmente deseables: plena supervisión reglamentaria de todas las instituciones financieras, plena rendición de cuentas de los responsables de la toma de decisiones, requisitos contracíclicos en materia de capital y eliminación de las operaciones fuera de balance.

En tercer lugar, la necesidad de instituciones financieras de propiedad pública plantea nuevos interrogantes en relación con aquellos sectores económicos esenciales que la sociedad no puede dejar en manos del sector privado. La crisis económica ha puesto de manifiesto que el sistema financiero y el sector de la vivienda son claros candidatos a la propiedad pública. La crisis energética nos indica que el sector de la energía y las inversiones en energías alternativas también requieren la titularidad pública. Problemas con los fondos de pensiones privados, al igual que con los proveedores privados de educación, servicios de salud e infraestructuras, nos indican que los servicios sociales son de una importancia demasiado fundamental para que puedan estar gobernados por motivaciones de lucro privado. Un debate público creativo y participativo tendrá que indagar sobre otros sectores en los que la propiedad pública generaría resultados más igualitarios y socialmente más eficientes. Estas sugerencias no pretenden ser una alabanza del sector público como tal, sino sobre todo una llamada a la participación y al control por las partes interesadas (trabajadores y trabajadoras, consumidoras y consumidores, representantes regionales) en los mecanismos de toma de decisiones en el marco de un modelo económico público y transparente. Un cambio en este sentido en el proceso de toma de decisiones también facilitaría la coordinación a escala de toda la economía de decisiones importantes para lograr un desarrollo sostenible y planificado basado en la solidaridad.

En cuarto lugar, y en relación con los aspectos internacionales de la Unión Europea, el apoyo de Occidente y cómo se concrete este para ayudar a los países del Este y del Sur a capear la actual crisis en la escala mundial será fundamental para la credibilidad política de la Unión. En estos momentos, el obstáculo principal para poner en marcha una política económica progresista en Europa es la especulación con la deuda pública y el compromiso de los gobiernos de dar satisfacción a los financieros. Las finanzas públicas deben liberarse de sus cadenas mediante el impago de la deuda, tanto en la periferia como en el centro. Las políticas alternativas deben incluir programas de inversiones públicas centrados en el desarrollo regional. Las inversiones públicas en el ámbito de la Unión, financiadas con impuestos progresivos de ámbito europeo, deben desempeñar un papel activo en la reconstrucción económica. Otro hecho importante que se ha puesto de manifiesto más claramente tras la crisis global es que la liberalización de la balanza de capitales genera turbulencias y problemas estructurales, sobre todo en las economías emergentes. Aunque tal vez sea práctico conservar el euro en los países integrados actualmente en la eurozona, la insistencia en mantener en el este de Europa unos tipos de cambio sobrevalorados vinculados al mismo supone volver la espalda a la necesidad de un ajuste amplio. En este caso, el riesgo devastador de una depreciación/devaluación solo se puede superar con controles sobre los capitales y una devaluación monetaria controlada, acompañados de controles sobre los precios.

Aun así, para que estas medidas no sean meros parches, es necesario que se inscriban en el marco de una transición de más largo alcance hacia una nueva sociedad. Es imposible «salvar al capitalismo de sí mismo». El objetivo que deben perseguir estas medidas no ha de ser simplemente aliviar la situación de la mayoría de la gente en el contexto de la crisis

presente (una tarea de Sísifo bajo el capitalismo), sino iniciar una «revolución de largo alcance» encaminada a crear una sociedad colectiva.

Notas

1. «Citigroup chief stays bullish on buy-outs», *Financial Times*, 9 de julio de 2007.
2. Gabor Hunya, *FDI in the CEECs under the Impact of the Global Crisis: Sharp Declines*, Vienna Institute for International Economic Studies, base de datos sobre inversión extranjera directa en el Centro, el Este y el Sureste de Europa, mayo de 2009.
3. Sameer Khatiwada, «Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis», Discussion Paper, International Institute for Labor Studies, 2009.